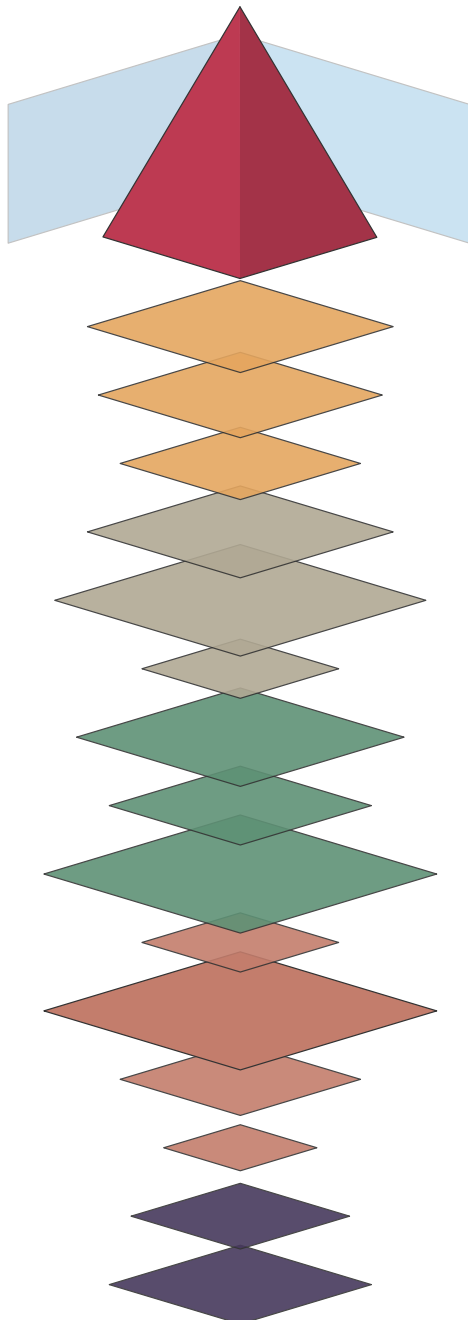


PERÚ



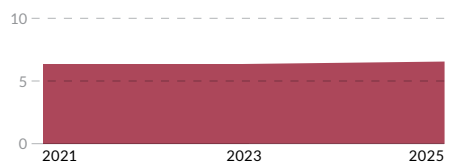
6.62 $\nearrow 0.22$

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

31.º de 193 pays $\nearrow 1$

10.º de 35 países americanos -

6.º de 12 países de América del Sur -



MERCADOS CRIMINALES

6.33 $\nearrow 0.13$

TRATA DE PERSONAS	7.00	0.00
TRÁFICO DE PERSONAS	6.50	0.00
EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	5.50	$\nearrow 1.00$
TRÁFICO DE ARMAS	7.00	$\nearrow 0.50$
COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	8.50	$\searrow 0.50$
COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES	4.50	$\nearrow 2.50$
DELITOS CONTRA LA FLORA	7.50	$\nearrow 0.50$
DELITOS CONTRA LA FAUNA	6.00	0.00
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	9.00	0.00
COMERCIO DE HEROÍNA	4.50	$\searrow 1.00$
COMERCIO DE COCAÍNA	9.00	0.00
COMERCIO DE CANNABIS	5.50	$\searrow 0.50$
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	3.50	$\searrow 1.00$
DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	5.00	0.00
DELITOS FINANCIEROS	6.00	$\nearrow 0.50$



ACTORES CRIMINALES

6.90 $\nearrow 0.30$

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	7.00	0.00
REDES CRIMINALES	8.50	0.00
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	8.00	$\nearrow 0.50$
ACTORES EXTRANJEROS	6.50	$\nearrow 0.50$
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO	4.50	$\nearrow 0.50$



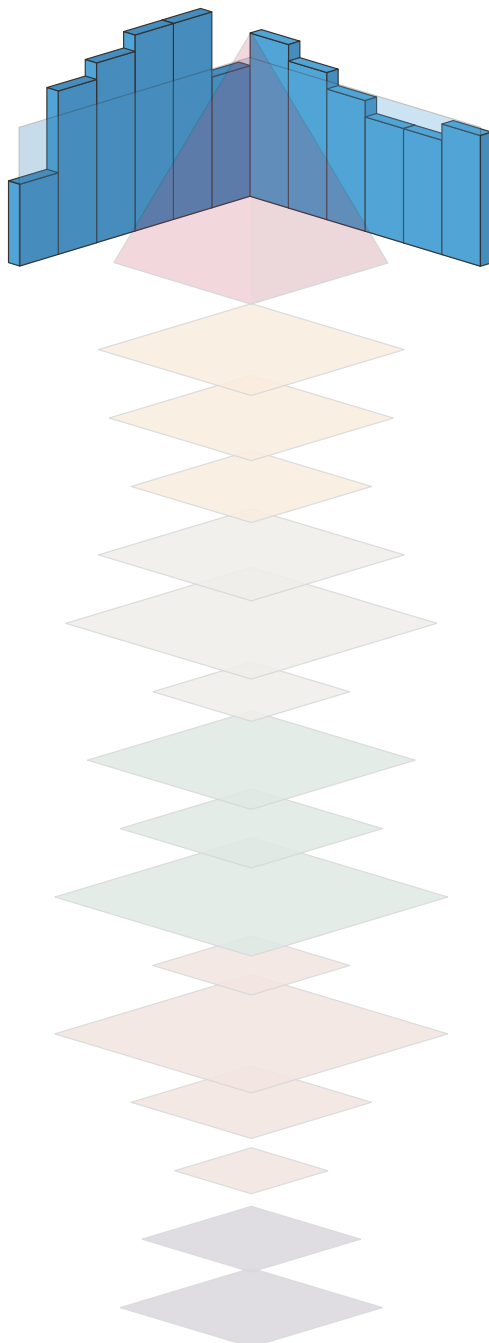
Financiamiento
proporcionado por
el Gobierno de los
Estados Unidos.



Funded by
the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

PERÚ



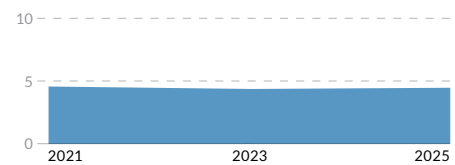
4.46 $\nearrow 0.08$

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

114.º de 193 pays $\nearrow 5$

24.º de 35 países americanos -

7.º de 12 países de América del Sur $\nearrow 1$



LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	2.50	0.00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	5.00	$\searrow 0.50$
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	5.50	$\nearrow 0.50$
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	6.00	0.00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	6.00	$\searrow 0.50$
CUERPOS DE SEGURIDAD	4.00	$\nearrow 0.50$
INTEGRIDAD TERRITORIAL	5.00	0.00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	4.50	$\nearrow 0.50$
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	4.00	0.00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	3.50	0.00
PREVENCIÓN	3.50	$\nearrow 0.50$
ACTORES NO ESTATALES	4.00	0.00



Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



Funded by the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Perú es un lugar tanto de origen como de destino de la trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual y laboral. La esclavitud moderna es frecuente y las principales víctimas son las niñas, especialmente para su explotación sexual. Los turistas extranjeros participan en estas actividades ilícitas, sobre todo en Cuzco, Lima y la Amazonía peruana. La explotación laboral suele afectar a migrantes vulnerables, en particular a los venezolanos. Los traficantes utilizan las redes sociales para reclutar y explotar sexualmente a los niños en línea, con cierta participación de los turistas extranjeros. Las víctimas sufren diversas estrategias de coacción, como violencia, endeudamiento, aislamiento, restricción de la libertad de movimiento y la retención de los pagos. Facilita la explotación laboral la prevalencia endémica del trabajo informal. El trabajo forzoso se da en sectores como la minería, la agricultura, la tala, la industria manufacturera y el servicio doméstico, impulsado por el mercado laboral informal. La corrupción y la complicidad oficial debilitan los esfuerzos contra la trata, ya que algunos funcionarios, incluidos algunos miembros de las unidades especializadas en la lucha contra la trata, han estado implicados en casos de soborno.

Perú es tanto un país de destino como de tránsito para el tráfico de personas y atrae a los venezolanos como destino y a migrantes caribeños, principalmente haitianos y cubanos, que van hacia Brasil y Chile. Las redes del tráfico, que incluyen a grupos venezolanos, brasileños, ecuatorianos y colombianos, a menudo se superponen con la trata de personas y se aprovechan de la vulnerabilidad de los viajeros. Algunos cuerpos de seguridad han estado implicados en facilitar el tráfico de personas mediante sobornos. Los migrantes se enfrentan a una violencia creciente, que incluyen incidentes en las comunidades y con la Policía, dirigidos principalmente contra los haitianos y los venezolanos. Las medidas recientes han restringido la entrada legal y la protección, lo que ha llevado a algunos venezolanos a buscar destinos alternativos, como Estados Unidos o Europa, con lo cual ha disminuido la cantidad de venezolanos que hay en Perú.

La extorsión se ha convertido en un mercado lucrativo y diversificado y las organizaciones criminales apuntan cada vez más a las empresas, los transportistas y los complejos residenciales. Dominan el mercado los grupos locales y los extranjeros, como el venezolano Tren de Aragua, especialmente en Lima. Las rivalidades entre las redes extranjeras y las locales alimentan la violencia, que incluye ataques con granadas y asesinatos por encargo, y casi la mitad de los homicidios cometidos en Lima en los últimos años están relacionados con la extorsión. Las empresas se

enfrentan a la exigencia de elevadas cuotas mensuales, unos cargos basados en los beneficios y unos gastos de registro, lo que dificulta la rentabilidad y la inversión.

TRÁFICO

Perú es un centro clave para el tráfico de armas y es un lugar tanto de origen como de tránsito para las armas destinadas a Europa, Ecuador y Colombia. Las rutas de contrabando nacen cerca de la frontera con Ecuador y las armas se transportan a través de este país hacia Colombia. Participan algunos grupos criminales extranjeros, como el Tren de Aragua y Los Tiguerones de Ecuador, alternando la cooperación y el conflicto con las redes locales. Las armas de fuego no reguladas, incluidas las no registradas y de fabricación casera, así como las municiones y los explosivos, sustentan el crimen organizado, especialmente el relacionado con la minería ilegal. En la región de Tumbes y en la de Piura han aumentado de golpe las incautaciones de municiones, que han experimentado un incremento espectacular en los últimos años. Las autoridades también dismantelaron una fábrica clandestina en Villa El Salvador, lo que reveló la prevalencia de la producción artesanal de armas, muy solicitadas, debido a su bajo coste.

El tráfico de productos falsificados sigue estando muy extendido en Perú y hay mercados importantes en Lima, como el Emporio Gamarra y Polvos Azules, que actúan como centros de distribución. A pesar de las redadas policiales que incautan cantidades significativas de ropa falsificada, la disponibilidad sigue siendo alta. También son habituales las ventas en línea, a través de sitios web y de las redes sociales. Los medicamentos falsificados están muy extendidos y se han hecho incautaciones notables, como una operación internacional coordinada cerca de la frontera entre Perú y Ecuador. El valor de los productos de contrabando muestra una tendencia general al alza durante la última década, impulsada por la actividad en regiones como Puno y las zonas del norte. Los avances jurídicos han reforzado la aplicación de la ley, al otorgar autoridad investigadora a la Policía y a los fiscales, pero el comercio sigue prosperando en medio de desafíos persistentes. Perú también se enfrenta al problema de la porosidad de las fronteras, que facilita la entrada de productos sujetos a impuestos especiales, a menudo por las mismas rutas que se utilizan para el tráfico de drogas, de oro y de maderas. Según algunos estudios recientes, cada año entran por sus fronteras con Chile y con Bolivia productos sujetos a impuestos especiales por valor de cientos de millones de dólares. La región de Puno, fronteriza con Bolivia, es un punto clave para este comercio, que incluye cigarrillos paraguayos.

MEDIOAMBIENTE

La tala ilegal es una práctica generalizada en Perú que aumenta la deforestación. La impulsan unas redes complejas, que falsifican los registros madereros para transportar madera a nivel regional e internacional, especialmente a China. Se obliga a las víctimas de la trata de personas y a las comunidades indígenas a participar en la tala y la minería ilegales. Los narcotraficantes también aprovechan las rutas madereras para camuflar los envíos de drogas y utilizan los puertos del Pacífico y los del Atlántico para su distribución mundial. Las comunidades indígenas se enfrentan a una mayor vulnerabilidad, debido a la explotación y al daño medioambiental. La corrupción en la gestión forestal dificulta la aplicación de las leyes. Se han revocado las certificaciones de sostenibilidad, debido a las preocupaciones en materia de derechos humanos relacionadas con la tala cerca de comunidades indígenas aisladas.

Perú es un centro importante de tránsito y de exportación para el tráfico ilegal de especies silvestres y de aletas de tiburón. Impulsado por la gran demanda, el tráfico de especies silvestres sigue siendo frecuente, sobre todo el de reptiles hacia Asia y el de mascotas exóticas. Los factores culturales también influyen en la comercialización local de las especies silvestres. La exportación de aletas de tiburón, que llegan sobre todo de Ecuador, ha aumentado considerablemente, lo que convierte a Perú en uno de los mayores exportadores del mundo. Los traficantes colombianos aprovechan que se ha legalizado el comercio legal de tortugas matamata, gracias a que en el 2015 se ha modificado la legislación, para «blanquear» las tortugas mediante el contrabando transfronterizo. Las deficiencias en la aplicación de la ley, la corrupción y la limitación de los recursos dificultan una regulación eficaz, a pesar de las iniciativas recientes para reforzar la vigilancia.

La minería ilegal en Perú se ha convertido en un importante desafío económico y social. Se ha intensificado en los últimos años, al aumentar los volúmenes de oro y de otros metales extraídos ilegalmente. Este es particularmente el caso en la Amazonía y en áreas protegidas, como La Pampa, donde se reanudaron las operaciones, a pesar de las medidas represivas anteriores. El contrabando a lo largo de la frontera entre Perú y Bolivia y la participación de organizaciones criminales locales y transnacionales han intensificado la minería ilegal y los delitos relacionados, como la trata de personas y la violencia. Las organizaciones criminales extranjeras, incluidas las redes venezolanas, las brasileñas, las ecuatorianas y las colombianas, explotan a las poblaciones vulnerables y tienen enfrentamientos violentos con los cuerpos de seguridad y las empresas mineras.

DROGAS

En cierta medida, Perú es un país productor de opio, que se cultiva en regiones como Cajamarca y Amazonas, con rutas de transporte que llegan hasta Ecuador. Los grupos peruanos exportan principalmente opio, ya que carecen de los laboratorios necesarios para transformarlo en heroína.

En cambio, el país es el segundo productor mundial de coca, con rutas de tráfico que se originan en el país y atraviesan sobre todo la Amazonía, desde donde la cocaína se envía a Brasil por vía fluvial. La cocaína se vende luego en el mercado local o se envía a países europeos, como Bélgica y Turquía. Las organizaciones criminales nacionales y las extranjeras, incluidos los remanentes de Sendero Luminoso y los cárteles extranjeros, dominan las redes del tráfico y utilizan pistas de aterrizaje remotas y rutas fluviales. Estas organizaciones controlan verticalmente la cadena de suministro y recurren a menudo a la violencia e incluso al asesinato. Las redes criminales extranjeras incluyen a grupos colombianos, brasileños, venezolanos, mexicanos e italianos, que coordinan los envíos a América del Norte, Europa y Asia. La producción de cocaína tiene graves repercusiones en las comunidades indígenas, ya que pone en peligro a tribus aisladas y provoca la destrucción del medioambiente, especialmente en la región amazónica.

El cannabis se cultiva junto con la coca en Perú, pero no se ha registrado ningún incremento de su cultivo. A pesar de los datos limitados sobre el tamaño y el valor del mercado del cannabis, se sabe que opera a través de redes criminales nacionales poco organizadas, que tienen conexiones transnacionales. Estas redes transportan el cannabis desde la región peruana de La Libertad hasta Chile, principalmente por la carretera Panamericana Sur, en camiones y furgonetas.

El mercado de las drogas sintéticas sigue siendo limitado en tamaño y en valor y ha habido algunas incautaciones de tusi («cocaína rosa»). Recientemente ha empezado a preocupar el posible contrabando de fentanilo desde Ecuador y se ha denunciado que algunas farmacias de Lima lo vendían sin receta médica. En general, Perú representa un pequeño porcentaje de los envíos de drogas sintéticas procedentes de América Latina y de las islas del Caribe que se encuentran en la red oscura.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Últimamente, Perú se ha convertido en blanco de ciberataques y la mayoría de las infracciones graves han sido ataques de ransomware. La policía peruana sufrió recientemente un ataque de ransomware, pero hay poca información sobre la respuesta de las autoridades. Las redes regionales e internacionales de ciberdelincuencia influyen significativamente en estas actividades.

DELITOS FINANCIEROS

Perú se enfrenta a importantes retos relacionados con la evasión fiscal, el fraude financiero y la producción de moneda falsa. Los altos niveles de trabajo informal contribuyen a una evasión fiscal considerable. El país ocupa un lugar destacado a nivel mundial en cuanto a phishing. Además, es un importante productor de dólares estadounidenses falsos. Recientemente se han desmantelado operaciones clandestinas de exportación

de moneda falsa a países vecinos y a Estados Unidos. La corrupción y la malversación de fondos, en las que están implicados los cuerpos de seguridad y algunos funcionarios locales, también provocan importantes pérdidas financieras.

ACTORES CRIMINALES

Además de una cantidad desconocido de actores de tipo mafioso, los restos del grupo terrorista Sendero Luminoso también operan con una estructura similar a la de la mafia. Los clanes familiares nacionales se dedican principalmente a la producción de cocaína para traficantes extranjeros, en particular colombianos, mexicanos y brasileños. Los grupos de tipo mafioso mantienen un control parcial sobre las poblaciones locales y recurren con frecuencia a la violencia contra sus oponentes, incluidas las comunidades indígenas. Los grupos criminales tienen bastante acceso a las armas de fuego, lo que fomenta un entorno de intimidación y de impunidad.

Las redes poco organizadas son muy influyentes y se concentran principalmente en Lima, en la región amazónica y cerca de la frontera con Ecuador. Las redes criminales, como los grupos mineros ilegales, cooperan con actores privados y extranjeros. Estos grupos se dedican a la trata de personas, la extorsión, la minería ilegal y los asesinatos por encargo en zonas mineras como Pataz. Las influencias transnacionales son notables y las redes peruanas colaboran con grupos ecuatorianos en el tráfico de armas, con organizaciones brasileñas y colombianas en el contrabando de especies silvestres y con redes chilenas en la distribución de cannabis.

La estructura fluida y descentralizada de estos grupos complica la aplicación de la ley y facilita las actividades delictivas transfronterizas. En los dos primeros meses del 2024, la Policía Nacional dismanteló 1 405 bandas delictivas, lo que pone de manifiesto la amplia presencia de redes criminales poco organizadas.

El crimen organizado en Perú está profundamente arraigado en las instituciones públicas y los miembros de los cuerpos de seguridad, los políticos y el Poder Judicial suelen estar implicados en actividades delictivas. La corrupción impregna diversos niveles, lo que propicia un entorno en el cual las organizaciones criminales actúan con impunidad. Las vulnerabilidades sistémicas

quedan patentes en los casos de gran repercusión, como los de los expresidentes acusados de tráfico de influencias y lavado de dinero. La corrupción de los cuerpos de seguridad es generalizada y va desde facilitar la trata de personas dentro de los centros penitenciarios hasta pasar por alto los permisos falsificados para el comercio ilegal de especies silvestres. Las autoridades medioambientales y las policiales a menudo no hacen cumplir la normativa. Algunos agentes manipulan las pruebas para obligar a los sospechosos a cooperar. Estas prácticas revelan que los actores estatales, incluso cuando no participan directamente en los mercados criminales, a veces facilitan y sostienen de manera significativa el crimen organizado. Ya sea por complicidad o por negligencia, entorpecen los esfuerzos para dismantelar las redes criminales.

Los grupos extranjeros también tienen gran influencia en el país. Los actores de Venezuela, Ecuador, Colombia y los Balcanes, además de los cárteles mexicanos, han ampliado su presencia en Perú, lo que pone de relieve las vulnerabilidades sistémicas en el control fronterizo y en los cuerpos de seguridad y exacerba la dinámica del crimen organizado transnacional. Los grupos delictivos venezolanos, en particular el Tren de Aragua, dominan múltiples mercados criminales, como la trata de personas, la extorsión, el tráfico de armas y el comercio de cocaína. Los grupos colombianos, como lo que queda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ejercen una influencia significativa sobre el tráfico de cocaína. Las bandas brasileñas, como el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, están arraigadas en las regiones fronterizas.

En cuanto a los actores del sector privado, se sabe que las empresas madereras y mineras auríferas legales de Perú facilitan el crimen organizado mediante la falsificación de certificados y de transacciones para blanquear el oro y la madera. Los empresarios madereros explotan a las comunidades indígenas con el pretexto de darles trabajo, mientras que las redes de tráfico ilegal de madera, en las que participan empresarios y funcionarios públicos, se benefician de la explotación laboral. El sector de la minería aurífera ilegal funciona como una intrincada red de mineros, intermediarios y propietarios de concesiones. Las instituciones financieras, como las cooperativas falsas, también participan en actividades criminales, en particular mediante estafas que explotan a los clientes con la falsa promesa de obtener altos rendimientos.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Perú se enfrenta a una grave crisis de seguridad, caracterizada por el aumento del crimen organizado, y casi la mitad de los asesinatos denunciados se produjeron en Lima. Los asesinatos por encargo y la extorsión han aumentado de

golpe, por lo cual el Gobierno ha incrementado la financiación de los cuerpos de seguridad y ha inaugurado laboratorios de identificación balística para rastrear las armas de fuego. También ha desplegado fuerzas militares y policiales especiales en respuesta al aumento de la violencia y a las amenazas de

las bandas de extorsión venezolanas. A pesar de todo, los partidos de la oposición critican las medidas del Gobierno, por considerarlas superficiales e ineficaces. Al mismo tiempo, el país se enfrenta a una crisis constitucional y los índices de aprobación, tanto del presidente como del Congreso, son bajos. Las acusaciones de corrupción y los controvertidos cambios constitucionales no hacen más que intensificar el descontento público y la inestabilidad política.

La corrupción sigue siendo un problema generalizado que debilita la confianza de la ciudadanía en el Gobierno y en las instituciones políticas. La mayoría de los ciudadanos opinan que la corrupción es el principal problema de Perú. Durante el período que abarca el informe, las investigaciones se centraron en políticos de alto nivel, entre ellos el presidente, varios expresidentes y numerosos legisladores, muchos de los cuales han sido acusados de corrupción o de otros delitos similares. No obstante, los funcionarios del Gobierno suelen impedir y eludir las investigaciones sobre las denuncias de corrupción, como la destitución arbitraria de los fiscales principales en unos casos de gran repercusión. Con la actual administración ha disminuido transparencia, se ha reducido el acceso a los datos presupuestarios y de contratación pública y hay más opacidad.

Perú combate activamente el crimen organizado mediante la cooperación internacional, los marcos jurídicos y las iniciativas de capacitación. Durante el período que abarca el informe, el país se sumó a los esfuerzos regionales en materia de seguridad, como la red andina de seguridad, cuyo objetivo es coordinar con los países vecinos las operaciones fronterizas contra el crimen organizado transnacional. También participó en una iniciativa de capacitación de los cuerpos de seguridad, encabezada por Estados Unidos, para mejorar el manejo de las pruebas digitales. Estados Unidos apoya la capacitación, la logística y la inteligencia de la Policía de élite, con la presencia de la DEA en Lima. Perú tiene tratados de extradición con 18 países, colabora con organismos de las Naciones Unidas y la INTERPOL y acoge el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, con el fin de reforzar la coordinación internacional de los cuerpos de seguridad.

El marco jurídico de Perú contra el crimen organizado sigue siendo sólido, aunque controvertido. La legislación aborda el tráfico de drogas y los delitos ambientales, como el tráfico de especies silvestres.

Se han reforzado las medidas contra las drogas, mediante grupos de tareas especializados y una estrategia nacional a largo plazo. Sin embargo, unas enmiendas aprobadas a pesar de la oposición generalizada han debilitado las normas contra la tala ilegal. La relajación de las leyes sobre armas provocó un aumento de su contrabando, lo que llevó a declarar el estado de emergencia en la frontera con Ecuador. Perú no cuenta con una estrategia nacional de ciberseguridad ni con políticas afines para luchar contra la ciberdelincuencia. Unas leyes controvertidas restringieron la capacidad de los fiscales

para investigar como crimen organizado algunos delitos que tenían penas leves, elevaron el umbral de clasificación de los delitos y transfirieron las investigaciones preliminares de los fiscales a la Policía, lo que desató críticas, porque eso podría debilitar los esfuerzos contra la corrupción y el crimen organizado.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El Poder Judicial de Perú se enfrenta a una corrupción generalizada y a un Estado de derecho comprometido, ya que las garantías constitucionales se respetan de forma desigual y la asistencia letrada es inadecuada para las personas que no hablan español. Durante el período que abarca el informe, una sentencia redujo el control judicial y aumentó el poder del Congreso y la injerencia política debilitó la independencia judicial. A pesar de los retos, se introdujo un programa de honestidad para combatir la corrupción. Los tribunales especializados se ocupan de los delitos de corrupción y las nuevas unidades de flagrancia tienen por objeto agilizar la justicia. Sin embargo, la falta crónica de financiación obstaculiza su eficacia y las investigaciones sobre la minería ilegal siguen estancadas. El Estado no controla el sistema penitenciario y persisten las actividades criminales dentro de las instalaciones, agravadas por la corrupción y el hacinamiento. Está prevista la construcción de una megaprisión para hacer frente a la grave superpoblación y a las malas condiciones de vida.

Si bien Perú ha realizado grandes esfuerzos para combatir el crimen organizado, sus cuerpos de seguridad siguen enfrentando retos relacionados con el tamaño, la financiación y la formación de las unidades policiales especializadas. Se establecieron iniciativas de colaboración, como la Unidad de Investigación de Delitos Transnacionales y los grupos de operaciones especiales conjuntos contra las drogas, a fin de reforzar las operaciones contra la delincuencia. Se intensificaron las medidas contra los delitos ambientales, mediante la cooperación regional contra el financiamiento ilícito. Se incrementaron los fondos destinados a los cuerpos de seguridad, lo que refleja la prioridad otorgada a la seguridad pública. Sin embargo, la confianza en la Policía y en las fuerzas armadas sigue siendo escasa, debido a los abusos y a la corrupción. Las altas tasas de rotación del personal dificultan aún más su eficacia. La Policía comunitaria en zonas remotas ha demostrado ser ineficaz. A pesar de las medidas anticorrupción, la desactivación de la unidad encargada de investigar delitos muy complejos suscita preocupación por una posible injerencia política.

La diversidad geográfica de Perú, que tiene terrenos montañosos, selvas frondosas y sistemas fluviales complejos, plantea retos importantes para el control fronterizo. La situación estratégica del país lo convierte en un importante mercado criminal y en un lugar de tránsito para el tráfico hacia Asia, América del Norte y Europa. Durante el período que abarca el informe se reforzaron las medidas de seguridad fronteriza, como la mejora de la vigilancia en la frontera con

Ecuador y el establecimiento de un puesto tripartito de control fronterizo en la confluencia con Chile y Bolivia. Se están utilizando la teledetección y la tecnología satelital para detectar actividades ilegales. A pesar de estos esfuerzos, la porosidad de las fronteras sigue siendo un problema fundamental, especialmente en la Amazonía y a lo largo de las fronteras con Brasil, Colombia y Bolivia. La corrupción de las infraestructuras del transporte agrava las vulnerabilidades.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Perú sigue siendo un punto focal para el lavado de dinero. Si bien el Grupo de Acción Financiera Internacional no lo incluye en la lista de países con deficiencias estratégicas en este sentido, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo considera una «jurisdicción de gran interés». Durante el período que abarca el informe, Perú ha fortalecido su marco contra el lavado de dinero, mediante alianzas público-privadas con importantes instituciones financieras y la elaboración de directrices de investigación con el apoyo técnico europeo. Algunas de las medidas legislativas destinadas a mejorar la transparencia financiera y a prevenir las actividades ilícitas son las regulaciones sobre los juegos de azar y la financiación colectiva. Sin embargo, algunas investigaciones de alto nivel siguen vinculando a funcionarios del Gobierno anteriores y actuales con el lavado de dinero y la financiación ilegal de las campañas electorales. El compromiso de Perú de luchar contra los delitos financieros es evidente, pero persisten los retos en cuanto a la aplicación de la ley y la rendición de cuentas. El país mantiene regulaciones económicas que apoyan el comercio y la inversión hasta cierto punto. El Gobierno ha invertido en infraestructuras digitales para mejorar la eficiencia y la transparencia de la regulación, centrándose en los sistemas de registro y concesión de licencias empresariales en línea. Sin embargo, la corrupción y la debilidad del Estado de derecho siguen obstaculizando la aplicación de los derechos de propiedad. El sector de la construcción, que en su día fue un motor clave del crecimiento económico, se estancó con el aumento de la violencia y la extorsión. El control criminal sobre la adquisición de tierras ha aumentado mucho y las ventas ilegales de terrenos generan importantes ingresos ilícitos, debido al aumento de la demanda de propiedades para su uso industrial y comercial. El empleo informal sigue siendo el más frecuente y la mayoría de los salarios no llegan al nivel mínimo legal.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

A pesar de los avances, persisten los retos. La financiación es limitada y la capacitación para identificar y proteger a las víctimas es insuficiente. Las medidas de atención a las víctimas incluyen la protección de su identidad, la asistencia

jurídica y el apoyo psicológico, pero las disparidades de los recursos dificultan una aplicación coherente. Teniendo en cuenta que las comunidades indígenas se enfrentan a amenazas cada vez mayores por parte de las actividades ilegales, los mecanismos para protegerlas no cuentan con suficiente financiación y están mal coordinados, lo que las empuja a reforzar sus estrategias de autodefensa. Las organizaciones de la sociedad civil prestan asistencia a las víctimas y llevan a cabo investigaciones, con unidades móviles que ofrecen apoyo inmediato en las zonas más remotas. El Gobierno peruano ha implementado diversas medidas para combatir el crimen organizado y se ha centrado en la trata de personas, el tráfico de especies silvestres y el tráfico de drogas. Las iniciativas de prevención incluyen una política nacional contra la trata de personas y una estrategia para reducir el tráfico ilegal de especies silvestres. La estrategia nacional de control de drogas se centra en la prohibición, la erradicación y la reducción de la demanda, con la cooperación de Estados Unidos.

A través de la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior se pueden denunciar los delitos de forma anónima por diversos canales. A pesar de estas iniciativas, el crimen organizado ha aumentado de golpe, incluidas la trata y la violencia medioambiental. En Perú, las oenegés se enfrentan a retos a la hora de promover la inclusión social, la protección del medioambiente y los derechos humanos. A pesar de la cooperación entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para apoyar a las víctimas, la injerencia del Estado ha obstaculizado las investigaciones sobre la corrupción y los mercados criminales. Los cambios legislativos propuestos ponen en peligro el derecho de asociación, al permitir que el Poder Ejecutivo disuelva las organizaciones que reciben financiación internacional sin supervisión judicial, lo que suscita preocupación por el abuso de poder. La libertad de prensa está protegida por la Constitución, pero sigue estando comprometida, ya que los periodistas se enfrentan a actos de violencia y acoso, especialmente durante las protestas. La creciente represión del Gobierno a las organizaciones de la sociedad civil y la imagen negativa que los principales medios de comunicación dan de los manifestantes han agravado las tensiones y debilitado los principios democráticos.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.